JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE TUNJA

CLASE DE PROCESO:	ESPECIAL (Deslinde y amojonamiento)
RADICADO No.:	1500131530022017 – 0013800
DEMANDANTE:	MARÍA CRISTINA CASTELLANOS MIRANDA
DEMANDADO:	BANCO DE COLOMBIA S.A, POLLOS OLIMPICOS S.A, Y OTRO
ASUNTO:	DECISIÓN DE EXCEPCIONES

Tunja, dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

ASUNTO

Procede el Despacho a resolver la excepción previa de “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” planteada por el apoderado judicial de la señora MARIA CRISTINA CASTELLANOS, la cual hace consistir en que en la demanda presentada no se indicaron los canales digitales de las partes, testigos y terceros y no se le remitió copia de la demanda en la forma establecida en el Decreto 806 de 2020.

TRÁMITE

Presentadas las excepciones previas se corrió en traslado al demandante por el término de tres días, dentro del cual guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1.- Las excepciones previas son fundamentalmente medidas de saneamiento procesal.

Las excepciones previas son medios defensivos enlistados taxativamente en el Código General del Proceso, a través de los cuales la parte demandada puede alegar la indebida conformación de la relación jurídica procesal e impetrar que hasta tanto sea subsanado el defecto, en la forma que corresponda, no se continúe el proceso, es decir, que la finalidad de tales medios exceptivos es la de purificar la actuación, desde el principio, de los vicios que tenga -principalmente de forma-, controlando así los presupuestos procesales, para dejar regularizado el proceso desde el comienzo, y evitar posteriores nulidades o fallos inhibitorios.

La excepción previa no ataca directamente la pretensión y constituye más bien un remedio destinado a poner en evidencia un vicio de carácter formal, que impide el regular adelantamiento del proceso. Se le llama previa porque ha de ser propuesta en el término de contestación de la demanda y se tramita y decide de inmediato, una vez que se ha trabado la litis y antes de entrar de lleno al debate principal. No obra, en consecuencia, el demandado al proponer la excepción previa, en interés individual, sino en procura del regular

desenvolvimiento del proceso y, por tanto, a favor de todos los sujetos, en la medida que su final legal, adecuado y justo les conviene por igual.

2.- La excepción previa de Inepta demanda procede en dos supuestos: 1) cuando la demanda no contiene los requisitos de forma contemplados en los artículos 82 y 83 del C.G.P. y 2) cuando la demanda contempla una acumulación de pretensiones indebida o contradictoria.

Los artículos 82 y 83 del C.G.P. señalan los requisitos que debe contener la demanda con que se promueve todo proceso y los adicionales de ciertas demandas....

Afirman el apoderado judicial de los demandados ORLANDO FLOREZ Y BETHY ELIZABETH PEREZ que la opositora a la línea fijada y ahora demandante- MARIA CRISTINA CASTELLANOS- en este proceso representada judicialmente mediante apoderada judicial-, no ha satisfecho las exigencias del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 806 de 4 de junio de 2020. Dice este artículo: "La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de inadmisión. Así mismo contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.

"En cualquier jurisdicción..., el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y sus anexos a los demandados..."

...

"En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio a demandado."

Pues bien, en el presente caso, observada la demanda, con la cual se formalizó la oposición a la línea fijada por el juzgado, se tiene que, en el capítulo, o acápite de "NOTIFICACIONES" se dijo: ...a los otros demandantes y a la demandada MARIA CRISTINA CASTELLANOS "En las direcciones que aparecen dentro de la demanda" entendiéndose que se refiere a la demanda inicial o "especial" de deslinde, es decir, dondeaunque ésta señora es demandante.

En esa demanda (Cuaderno 1 consecutivo 2) a folio 85 se dice: NOTIFICACIONES: LOS DEMANDADOS, SEÑORES ORLANDO FLOREZ Y BETHY ELIZABETH PEREZ, EDURADO CASTELLNOS, ANA LUCIA FERNANDEZ, LUISA MARIA SILVA, CARMEN HERCILIA ARDILA, ALBERTO HERNANDEZ TELLO Y MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES,... “desconocemos los correos electrónicos o sus números telefónicos...”. Respecto de POLLO OLIMPICO S.A. y la sociedad INVERSIONES VAZQUES SALAZAR S. EN C., y el Banco de Colombia, si se indican sus correos electrónicos. La demandante, valga decir MATRIA CRISTINA CASTELLANOS-, en la dirección Calle 12 B N° 8 - 23 oficina 771 Bogotá, CORREO ELECTRONICO nelvimar@yahoo.es. El apoderado VIDALES MARTINEZ colocó la misma dirección de correo electrónico de su mandante.

Entonces, al remitirse la parte opositora al deslinde, a las direcciones de notificaciones obrantes ya en el proceso, se entiende satisfecho el requisito, que el apoderado judicial de la señora MARIA CRISTINA CASTELLANOS, echa de menos.

Ahora bien. Al examinar la demanda de mérito, encuentra el juzgado que no existe ninguna deficiencia formal en punto del canal digital donde deben ser citados los testigos y peritos, pues, en primer lugar en dicha demanda no se está solicitando ningún dictamen pericial, por cuanto aunque se titula así, realmente se trata de prueba documental - Planos-, luego, el argumento del excepcionante cae en el vacío.

El lo que toca con los testigos, la Corte Constitucional en la sentencia C- 420 DE 2020, concretamente sobre la exequibilidad del artículo 6° del Decreto 806 de 2020, dijo que la finalidad de esta norma de emergencia, en general es agilizar, simplificar y facilitar el trámite de los procesos y en particular el trámite de notificación, tanto del auto admisorio como la comunicación a los testigos, peritos y terceros para que puedan intervenir en la audiencia. Agrega que se trata de un deber y una carga impuesta al demandante y hace parte del deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales según el artículo 95 - 7 de la Constitución Nacional.

Considera - Esta Alta Corporación-, que la finalidad del artículo 6° del decreto mencionado, es permitir de que la interacción entre las autoridades judiciales y las partes y entre éstas, pueda desarrollarse mediante el uso de las TIC.

Agrega que la carga procesal prevista en el artículo 6°, facilita el proceso de notificación del auto admisorio y habilita la comunicación con las partes mediante TIC, desde el inicio de proceso.

En el inciso 4° del artículo 6°, si el demandante no conoce el canal digital al que puede enviar la demanda al demandado podrá cumplir la remisión previa de esta actuación mediante el envío físico de los documentos, lo que garantiza que su derecho de acceso a la administración de justicia no se vea truncado por esa circunstancia.

“285. La Corte reconoce que, si bien la información de notificación electrónica de los testigos, peritos y terceros reviste relevancia para el proceso, y para su trámite mediante el uso de las TIC, el evento de su incumplimiento no afecta los intereses que se protegen con la inadmisión de la demanda. En la sentencia C-833 de 2002 la Corte expresó que el propósito de la inadmisión de la demanda es “evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo, o que la presentación de un escrito no involucre en sí mismo una controversia, es decir que no haya una litis definida”. En este caso, la ausencia de información sobre el canal digital de los testigos, peritos y terceros no tiene la virtud de generar un fallo inhibitorio o de desgastar a la administración de justicia en el trámite de un proceso sin objeto. A lo sumo, esta carencia podría generar la imposibilidad de practicar una prueba, con las consecuencias que de ello se derivan para la parte interesada[461]; o bien de vincular al proceso a un tercero que, aunque pueda tener interés, no hace parte de la relación jurídica que se traba en el proceso[462]. En consecuencia, la imposición de una sanción como la inadmisión de la demanda, que excede el ámbito específico del proceso al que importan los testigos, peritos y terceros es una respuesta desproporcionada a la necesidad de tramitar los procesos judiciales mediante el uso de las TIC y por lo mismo constituye una barrera de acceso a la administración de justicia, en tanto impide al demandante poner en conocimiento de la autoridad judicial un conflicto, solo por desconocer una información que no es trascendental para la efectividad del proceso.

286. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del artículo 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión”.

En el presente caso, la apoderada judicial de los opositores, si bien en su demanda no afirma desconocer la dirección electrónica de los testigos, de su omisión se deduce su no conocimiento, luego, como lo explica la misma Corte Constitucional, es una información que NO es trascendente para la efectividad del proceso.

Los tratadistas que intervinieron en la redacción de la norma, igualmente exponen, al explicar dicho Decreto, que en últimas, es un problema que se resuelve al momento de citar a los testigos, luego no es un requisito de admisibilidad de la demanda, no indicar la dirección de correo electrónico o el canal digital de los testigos- Luego, esto no es motivo de inadmisión de la demanda.

Además, en las solicitudes de los testigos, sí SE INDICAN los números de teléfonos móviles - celulares-, de cada uno de ellos, salvo el de Pedro Grimaldo Espitia.

Respecto al envío de copia de la demanda a la contraparte, tampoco es posible inadmitir la demanda para que lo haga, pues dicho envío se puede hacer después, solución que trae el artículo 8 del Decreto 806 de 2020.

Aunado a todo lo anterior, la apoderada demandante en el proceso verbal, en memorial de reposición a la providencia que había rechazado la demanda manifestó que había remitido los documentos a su contraparte.

Por lo anterior, la excepción no está llamada a prosperar.

Sobre la Falta de integración del litis consorcio necesario por la parte pasiva propuesto por el mismo apoderado judicial excepcionante, la cual fundamenta en que no se citó al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, pues es colindante en un predio que antes era del INCORA y que hoy está destinado como parqueadero de la Policía Nacional, este Despacho judicial considera:

La excepción de no comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios, ocurre cuando la demanda se refiere a situaciones jurídicas sustanciales, sobre las cuales no es posible hacer un pronunciamiento de fondo fragmentariamente o sólo referido a algunos de los sujetos que hacen parte del negocio jurídico correspondiente, porque la sentencia que deba dictarse los afecta a todos.

Este medio exceptivo está consagrado en el numeral 9 del artículo 100 del Estatuto Procesal Civil y se presenta en términos del artículo 61 ibídem, cuando “el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas...”.

En el presente caso la mencionada excepción no está llamada a prosperar. Veamos:

Los inmuebles en general y en particular los rurales delimitan o colindan en sus costados, por lo general con varias personas. Por lo tanto, el deslinde puede ser únicamente con uno de dichos colindantes, con quien se tienen diferencias o hay duda sobre la línea que divide los predios, pero por los otros costados o con los otros colindantes, la situación para el demandante puede ser clara o no haber controversia. Por lo tanto, en un proceso de deslinde no se deben citar a todos los colindantes del predio del demandante sino al dueño del predio colindante con el cual se tiene la incertidumbre sobre la línea divisoria.

Entonces, si por un costado el predio “El Carmen” de la señora MARIA CRISTINA CASTELLANOS, colinda o se toca con una propiedad del Municipio de Villa de Leyva o de cualquier entidad pública, pero por ese sector no existe controversia en cuanto al lindero que los separa, pues la lógica dice que no se debe demandar con quien no se tiene controversia, pues la naturaleza de este tipo de procesos no lo permite.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar No probada la excepción previa de “Inepta demanda por falta de los requisitos formales” y la de “Falta de integración del litis consorte necesario” propuestas por el apoderado judicial de la señora MARIA CRISTINA CASTELLANOS.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte promotora de las excepciones previas, es decir a la demandada MARIA CRISTINA CASTELLANOS. Señalar la suma de UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$1'000.000.00) como agencias en derecho, de conformidad con el Acuerdo PSA 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura

TERCERO: Otorgar el término de DIEZ (10) DIAS HÁBILES para que el apoderado de la señora MARIA CRISTINA CASTELLANOS, allegue el dictamen pericial que anuncio al momento de contestar la demanda, de conformidad con el artículo 227 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Original firmado por)
HERNANDO VARGAS CIPAMOCHA
Juez Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja¹

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE TUNJA.

El anterior auto fue notificado por Estado N° 09 hoy
diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

(Original firmado por)
CRISTINA GARCIA GARAVITO
Secretaria

¹ (El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el artículo II del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, por cuya virtud se autoriza la “*firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada*”, en virtud de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional).